

Suprema Corte:

-I-

T.S.R. Time Sharing Resorts S.A., con domicilio en la Capital Federal —en su carácter de titular del complejo turístico con unidades de alojamiento y servicios complementarios denominado “Paihuen”, ubicado en el Parque Nacional Lanín (como surge de la escritura pública obrante en fotocopia, a fs. 36/43)—, interpone acción de amparo, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y de la ley nacional 16.986, contra la Provincia del Neuquén (Dirección General de Rentas), a raíz de la intimación de pago que le efectuó ese organismo del impuesto local inmobiliario (v. fs. 65/68 y 70) y por la posterior resolución que emitió, mediante la cual le aplica una multa por incumplimiento de los deberes formales establecidos en el art. 28 del Código Fiscal provincial (v. fs. 89/93).

Impugna ese acto en cuanto sostiene que la Provincia carece de facultad para imponerle dicha obligación tributaria, puesto que el complejo turístico está ubicado en un establecimiento de utilidad nacional, el Parque Nacional Lanín, bajo la autoridad de la Administración de Parques Nacionales.

En consecuencia, aduce que la pretensión del Estado local es arbitraria y manifiestamente ilegítima en cuanto interfiere con los objetivos principales de la Administración de Parques Nacionales, oponiéndose a las leyes que regulan su funcionamiento y potestades, puesto que obliga a T.S.R. Time Sharing Resorts S.A. a soportar gastos extraordinarios que hacen imposible el cumplimiento de la preservación del medio ambiente y del patrimonio natural, todo lo cual conculca los arts. 14, 17, 75, inc. 30, y concordantes de la Constitución Nacional y la ley 22.351 de Parques Nacionales.

Solicita, en forma urgente, que se dicte una medida cautelar de no innovar, por la cual se suspenda la intimación de pago efectuada y se ordene la Provincia que se abstenga de ejecutar las sumas pretendidas hasta tanto se resuelva la cuestión planteada en autos.

También peticiona que se cite como tercero al pleito a la Administración de Parques Nacionales.

A fs. 108, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

En principio, cabe recordar que V.E. ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo tramite en esta instancia, en la medida en que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria, toda vez que, de otro modo, en tales ocasiones quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 320:1093; 322:190 y 1387; 323:2107 y 3326 y 325:519).

Sentado lo expuesto, entiendo que la cuestión radica en determinar si en el *sub*

*lite* se presentan dichos requisitos.

Uno de los supuestos en que procede la competencia originaria de la Corte si es parte una Provincia, según el art. 117 de la Constitución Nacional, es cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 2457; 322:1470; 323:2380 y 3279).

En el *sub lite*, según se desprende de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, de conformidad con el art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la pretensión de la actora consiste en impugnar la aplicación de un tributo por parte de la Provincia de Neuquén, por ser contrario a las normas constitucionales que indica e interferir con los fines específicos del establecimiento de utilidad nacional sobre el cual está ubicado el complejo turístico de su dominio, el Parque Nacional Lanín.

A mi modo de ver, tal circunstancia es suficiente para considerar que la materia del pleito reviste un manifiesto carácter federal, puesto que dicha determinación tributaria puede llegar a interferir con el fin específico asignado al establecimiento de utilidad nacional dentro del que la actora está ubicada (art. 75, inc. 30, de la Constitución Nacional).

Dicha postura ha sido sostenida por V.E. en varios precedentes sustancialmente análogos, por entender que procedía la intervención del fuero federal al verse afectados intereses que excedían los encomendados a los tribunales provinciales (confr. sentencia *in re* Comp. 1073, XXXVII, “Nextel Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ amparo – cautelar”, del 23 de octubre de 2001, en el que el Tribunal se expidió de conformidad con el dictamen de este Ministerio Público del 14 de agosto de 2001, y sus citas, y Comp. 780, XXXVII, “C.T.I. P.C.S. S.A. c/ Municipalidad de Hurlingham s/ amparo”, del 26 de marzo de 2002).

No obsta a lo expuesto lo establecido por el art. 18, segunda parte, de la ley 16.986, dado que, si bien limita su aplicación por los jueces federales de las provincias a los casos en que el acto impugnado mediante la acción de amparo provenga de una autoridad nacional, dicha regla tiene su excepción en aquellos casos en que la materia en debate sea de carácter federal —como sucede en el *sub judice*— pues, de lo contrario, una ley nacional alteraría un precepto constitucional, el art. 116 de la Ley Fundamental (Fallos: 321:207 y 1860, v. dictámenes de este Ministerio Público).

En tales condiciones, toda vez que resulta demandada la Provincia del Neuquén en una causa de manifiesto contenido federal, opino que, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros), este proceso debe tramitar ante la instancia originaria del Tribunal.

A mayor abundamiento, es dable poner de relieve que también su competencia procedería *ratione personae* de considerar V.E. admisible la citación como tercero de la Administración de Parques Nacionales, solicitada por la actora, dado que es parte una Provincia.

Ello es así, a fin de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación —o a una entidad nacional— al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental (Fallos: 312:389; 323:4046; 325:2223, entre otros).

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2004.-

RICARDO O. BAUSSET.-

ES COPIA.-